

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos sobre Juicio Ordinario de indemnización de perjuicios, seguidos por don Rodolfo Esteban Rutkowsky Quiñealeo en contra del Fisco de Chile, por sentencia de veintisiete de mayo del año dos mil veinticuatro del Segundo Juzgado Civil de Santiago, se rechazaron las excepciones de cosa juzgada, reparación integral y prescripción extintiva, opuestas por el demandado Fisco de Chile en su escrito de contestación y se acogió la demanda de indemnización de perjuicios deducida, condenando al demandado al pago de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) en favor del demandante, por concepto de daño moral, por las detenciones ilegales y torturas cometidas por agentes del Estado de Chile, disponiendo que dicha suma deberá ser pagada debidamente reajustada según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo, devengando intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional desde la fecha en que el deudor sea constituido en mora con ocasión del cumplimiento incidental de esta sentencia, ordenando que cada parte soporte sus costas.

En contra de dicho fallo la demandante presentó recurso de casación en la forma y apelación y concedidos los recursos, se elevaron los autos para su conocimiento y resolución.

La parte demandante se adhirió a la apelación.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma

Primero: Que la parte del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, interpuso recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veinticuatro, fundado en la causal prevista en el N° 6 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada.

Al efecto, señala que se encuentra acreditado en estos autos, que el actor dedujo, junto a otros demandantes, demanda civil en contra del Fisco de Chile, en causa seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C- 1980-2006, caratulada "Salgado y otros con Fisco de Chile", sobre



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HJQWXTWGPKL

indemnización de perjuicios por daño moral por estos mismos hechos. Explica el recurrente que dicha demanda fue rechazada por sentencia de primer grado, de fecha 5 de julio de 2011, al ser acogida la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil opuesta por el Fisco. Dicha sentencia fue confirmada bajo el Ingreso N°7649-2011, con fecha 19 de enero de 2014. Agrega que, por sentencia de 19 de noviembre de 2014 de la Corte Suprema, en el ingreso N°7.888-2014, se rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante.

Agrega el recurrente que no obstante, concurrir todos los requisitos para hacer lugar a esta excepción, el sentenciador la rechazó y acogió la demanda, estimando que la excepción no obsta al acogimiento de la pretensión indemnizatoria de dicha víctima, desde que lo pedido no significa desvirtuar la legalidad de los procesos seguidos antes para resolver la misma materia, en los que se declaró la prescripción de la acción civil indemnizatoria intentada contra el Estado de Chile, sino únicamente afirmar que la institución de cosa juzgada no puede excusarle del deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes.

Expone que en dicha demanda y en la de autos se interpusieron idénticas pretensiones indemnizatorias, basadas en los mismos hechos y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistemas de responsabilidad del Estado, las que fueron conocidas y resueltas mediante sentencia definitiva y ejecutoriada que declaró prescrita la acción.

Sobre la base de todo lo dicho, concluye que la sentencia definitiva ejecutoriada ya dictada en el proceso precedentemente individualizado, que declaró la prescripción de la acción patrimonial indemnizatoria, produce la excepción de cosa juzgada respecto de la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile impetrada en autos, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, concurre la triple identidad: de identidad legal de personas, de cosa a pedir y de causa de pedir, máxime si los hechos en que se funda una y otra demanda son idénticos.



En ese entendido, el peticionario estima que la demanda de autos debió ser rechazada, desde que concurren los presupuestos legales de la excepción perentoria de cosa juzgada opuesta en estos antecedentes, por lo que, al acogerse, se produce un evidente perjuicio al Fisco de Chile, por cuanto le ordena pagar la suma \$70.000.000 en favor del demandante, con lo que el vicio ha influido decisivamente en lo dispositivo del fallo.

En definitiva, el recurrente pide que se acoja e recurso, se invalide la sentencia recurrida y, acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo, rechazando la demanda en todas sus partes.

Segundo: Que el tribunal a quo rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta, sosteniendo, en lo medular, que si bien la demanda de indemnización de perjuicios deducida en contra del Fisco de Chile, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N C-1890- 2006, el daño moral sufrido por las detenciones ilegales y torturas sufridas a manos de agentes del Estado, fue desestimada, por considerar que la acción intentada se encontraba prescrita, ello no excusa al Estado de Chile del deber de reparación a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos.

Al efecto argumenta sobre la base de los razonamientos vertidos en la sentencia de casación de fecha 13 de octubre de 2022 en autos CS N° 104.558- 2020 y lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce, lo que implica el deber del Estado y sus agentes de abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención y el de emprender las acciones necesarias para asegurar su ejercicio y que determina la obligación del Estado de organizar el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En el mismo sentido, sostiene que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, procurar su restablecimiento y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos. Agrega que, en aplicación del control de convencionalidad, el tribunal debe aplicar el derecho interno en armonía



con las normas internacionales de los derechos humanos, sin que ninguna norma del derecho interno permita una distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad. En ese sentido agrega que, conforme al derecho internacional humanitario corresponde al Estado de Chile, luego de investigar los hechos y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, sean directas o indirectas. Finalmente señala que lo anterior permite constatar la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de delitos que no respeten las disposiciones imperativas o inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Tercero: Que cabe advertir que en contra de la sentencia impugnada mediante el recurso de casación formal, la misma parte dedujo también recurso de apelación del que debe conocer la Corte en esta oportunidad, cuestionando en este último arbitrio, el rechazo de la excepción de cosa juzgada, por lo cual resulta que, de ser ciertos los fundamentos de este reclamo, la falencia podría ser subsanada por vía de la apelación también intentada, eludiendo de esta manera el saneamiento extrema ratio, conforme al principio que consagra el inciso penúltimo del propio artículo 768 del Estatuto Procesal, por lo que se desestimaré el recurso en examen.

II.- En cuanto al recurso de apelación deducido por la parte demanda y la adhesión de la demandante.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, pero en el motivo vigésimo primero párrafo primero se sustituye la palabra “tendrán” por “tendrá”; y se eliminan las frases “dos elementos; por un lado” y “y, por otro lado, los pagos realizados por el demandado Fisco de Chile a fin de reparar el daño causado”.

En el párrafo segundo se sustituye la frase “sobre lo primero” por “para ello”, se elimina desde la expresión “Sobre lo segundo” hasta “\$230.025” y se sustituye el guarismo “70.000.000 (setenta millones)” por “30.000.000 (treinta millones)”.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Cuarto: Que, para analizar la severidad del sufrimiento padecido por el actor, se deben tomar en cuenta las características específicas de cada caso, tales como la manera en que fue detenido, el lapso de privación de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HJQWXTWGPKL

libertad, la tortura infligida y las consecuencias físicas y mentales derivadas de ello, así como las condiciones de las personas que padecieron dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales. En el caso sublite, del mérito de los antecedentes aparece que el demandante Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeleo, a la época en que comenzaron los hechos por los cuales el Estado ha sido condenado, tenía 25 años y se desempeñaba como obrero, siendo detenido en distintas ocasiones entre los años 1982 y 1987, por lapsos que en total suman 10 días, siendo trasladado a distintos centros donde fue sometido a interrogatorios, amenazas y golpizas. Estas vulneraciones a su integridad física y psíquica alteraron su proyecto de vida, dejando secuelas que se mantienen hasta la fecha, desprendiéndose del informe psicológico y médico de daños emanado del PRAIS que el actor presenta un daño asociado a los eventos traumáticos, generando conductas de desorganización familiar, efectos de traumatización extrema y trauma transgeneracional en el núcleo familiar.

Quinto: Que es conocida la dificultad que existe para determinar en forma cuantitativa y económica la compensación del daño moral. Empero, en la necesidad de efectuar su valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de equidad y de experiencia. De esa manera, en la medida de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos –los hechos probados- la naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar.

Sexto: Que, en cuanto a esto último, considerando que quien demanda reclama el resarcimiento de su propio daño, esto es, se trata de una víctima directa del ilícito cometido en su contra por agentes del Estado, es posible inferir que se ha verificado a su respecto una lesión de especial intensidad, teniendo en consideración la forma en que se sucedieron los hechos, lo que permite presumir la afectación que ha padecido. Empero, la regulación correlativa también debe guardar algún grado de correspondencia con determinaciones efectuadas por esta misma Corte en casos semejantes, motivo por el que la indemnización fijada en primera instancia debe ser disminuida. En tales condiciones, se estima razonable regular esa



indemnización en la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000), suma que será pagada con los reajustes e intereses que se señalan en la sentencia que se reproduce.

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 766, 768, 781 y 783 del Código de Procedimiento Civil y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve lo siguiente:

I.- Se rechaza el recurso de casación en la forma, deducido por el demandado en contra de la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro del Segundo Juzgado Civil de Santiago, dictada en estos autos.

II.- se confirma la sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por Segundo Juzgado Civil de Santiago, **con declaración** que se fija en la suma de treinta millones de pesos (\$30.000.000) la indemnización que por concepto de daño moral deberá pagar el Fisco de Chile a la parte demandante, con los reajustes e intereses señalados en la misma.

Regístrese comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Interina doña Paula Rodríguez Fondón.

Civil N° 12.374-2024.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, por la ministra (s) señora Paula Rodríguez Fondón y el abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HJQWXTWGPKL

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N., Ministra Suplente Paula Rodriguez F. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HJQWXTWGPKL